

social que dificultará aún más la gestión de la economía. Y eso mientras no se impongan controles estrictos, lo cual sería mucho peor.

Y eso mientras no se llegue a niveles de tensión negociadora incontenibles. Porque, una vez más, el índice del coste de la vida no refleja —no estamos analizando su elaboración— la elevación real de los precios a tenor de las necesidades irrenunciables de gasto de los trabajadores. Y es eso lo que determina sus reivindicaciones, sea cual sea el momento económico, máxime cuando a la hora de apretarse el cinturón sólo ellos son los llamados.

Peticiones de aumento van a seguir existiendo por tanto. Y los topes valdrán de poco si los trabajadores tienen suficiente fuerza y las empresas deciden que es mejor satisfacerlos que dejar de producir, siempre en el supuesto de que no se altere sustancialmente su rentabilidad. Por el contrario, como ya está ocurriendo de forma notoria, los salarios tenderán a bajar en términos reales en aquellos sectores débiles desde el punto de vista de la fuerza negociadora de los trabajadores. Y con ello, teniendo en cuenta además que estos últimos no son una minoría exigua, se producirá un nuevo descenso de la capacidad de consumo y de la demanda interna, que es el auténtico «motor» de la crisis actual.

## TAMBIEN LA POLITICA JUEGA

El problema consiste en encontrar un término medio razonado, equilibrado y justo, como se está haciendo en otros países en los que la presión obrera es fuerte, está organizada y es reconocida desde el poder (véase Italia e Inglaterra, a pesar de todas sus dificultades). En encontrar las soluciones con la intervención de todas las partes —desde plataformas auténticamente representativas y con verdadera capacidad de transmisión de las decisiones acordadas— está el problema. Es ese el segundo plano del que hablábamos antes.

Porque de la crisis económica se va a salir no sólo con medidas reactivadoras, cuya concreción es difícil, por otra parte, sino con unos acuerdos que sancionen la participación de todos los sectores interesados en la gestión de la economía. Y es entonces cuando podría hablarse de las limitaciones salariales en determinados sectores, que, inevitablemente, habrían de ir acompañadas de elevaciones sustanciales en otros.

Pero, y una vez más, el marco institucional y político debería ser revisado para que ello fuera posible. Ni con los actuales sindicatos, que si fueran representativos estarían llamados a jugar un papel clave en este proceso, ni con las escasas posibilidades de participación política —porque la política tiene un lugar de privilegio a la hora de resolver estos problemas coyunturales de la economía— se puede pensar en soluciones del tipo de las que hablamos.

■ CARLOS ELORDI.

### UN MENSAJE DE PAZ

## El Manifiesto de los objetores de conciencia

● Tras la Misa del Gallo de cinco parroquias barcelonesas, otros tantos hombres jóvenes leían ante los asistentes «un mensaje de paz,

aunque al hacerlo corremos el riesgo de ser detenidos». Curiosa, trágica contradicción esta entre hablar de paz y pasar por el peligro de acabar en la cárcel. Pero es que no menos curiosa y trágica es la historia de la objeción de conciencia en España, la aventura de unos hombres que —desde posturas de no-violencia— rechazan los caminos que pueden conducir a una alternativa bélica, y, por tanto, lo que les prepara para ella: el Servicio Militar.

Porque objetores de conciencia no-violentos eran los que así se expresaban en la Nochebuena. Todos ellos (entre los veintidós y los veinticinco años de edad) de oficios tan diversos como arquitecto, carpintero, estudiante de Teología o psicólogo, de procedencias geográficas igualmente distintas, pero unidos por una idea común: la de mostrar al país que un Servicio Civil es el camino adecuado como opción al Servicio Militar.

No se trata de una pura posición teórica, ni más o menos idealista. Los cinco firmantes del «Manifiesto de los objetores de conciencia» llevan trabajando duro desde hace cinco meses en la barriada obrera de Can Serra (Hospitalet), tan falta como muchísimas otras de los servicios cívicos más imprescindibles. «Veinte días de colonias infantiles (el «Casal d'Estiu») en el barrio, con asistencia de más de un centenar de niños; arreglo de un local de ancianos y animación del mismo durante cuatro meses; colaboración con la escuela de adultos, dando clases de artesanía y alfabetización y organizando la biblioteca; creación de un Jardín de Infancia con asistencia de unos veinticinco niños; arreglo de locales comunitarios al servicio del barrio», es el resumen que los propios protagonistas hacen de su Servicio Civil, advirtiendo previamente de las limitaciones que han llegado (falta de medios, dificultades económicas, ausencia de apoyo oficial, poco tiempo de adaptación entre la gente del barrio, etcétera).

Es un simple ejemplo de lo que proponen los objetores de conciencia, pero lo suficientemente

ilustrativo como para que fuese tomado en cuenta. Tomado en cuenta en sentido positivo, queremos decir. Porque cuando Pepe Beúza, iniciador de este movimiento concreto, desarrolló una labor similar en el barrio valenciano de Orriols, como sustitución del Servicio Militar, fue encarcelado, la respuesta oficial por desertión y condenado a un año de cárcel y enviado después a un Batallón disciplinario del Sahara...

¿Habrá cambiado las cosas, como tanto se nos asegura desde titulares de prensa o pantallas de televisión? La respuesta se producirá en estos días, cuando el reclutamiento afecte sin remedio a los cinco firmantes del citado Manifiesto. ¿Engrasarán el número de objetores de conciencia que se encuentran en prisión (más de trescientos actualmente, la mayoría Testigos de Jehová), siguiendo así el camino de los cuatro objetores no-violentos que ya han sufrido largas temporadas de cárcel? En ese caso, el destino de los objetores es bien claro: de tres a ocho años de cárcel, con privación de todos los derechos políticos e incapacidad para establecer relaciones laborales con entidades públicas o subvencionadas o intervenidas por el Estado, con entidades paraestatales autónomas y corporaciones de la Administración, así como —(nada menos)— que para la docencia. Es lo que marca la Ley de Negativa a la Prestación del Servicio Militar, un texto legal aprobado cuando el almirante Carrero presidía el Gobierno (su aprobación se hizo un día antes de su muerte, pues lleva fecha de 19-XII-1973), y después de que dos anteriores proyectos de Ley fuesen o retirados por el Gobierno (julio de 1971) ante la pública hostilidad de la Comisión de Defensa Nacional de las Cortes, o, anteriormente (abril de 1970), rechazado por ésta, siendo la primera vez desde la guerra civil en que las Cortes se oponían a un proyecto de Ley presentado por el Gobierno.

Lógicamente, la solución habría de ir por otro camino muy distinto. Por el que recogiendo las aspiraciones de numerosos grupos, entidades y personas, propusiera al Gobierno la Comisión





En 1971, un grupo internacional de objetores de conciencia intentaron una marcha a pie desde Ginebra hasta la prisión de Valencia, donde estaba detenido Pepe Beuzin. En la frontera franco-española la Policía les impidió el paso.

Justicia y Paz el mes de mayo pasado: la creación de un Cuerpo de Voluntarios para el Desarrollo que «efectuara labores de promoción social y en el que, de manera desinteresada, participarían jóvenes de ambos sexos», sirviendo como cauce para aquellos que «podrían así cumplir deberes de solidaridad nacional que les servirían para quedar exentos del Servicio Militar, si su conciencia así se lo exigiese, con la compensación de un tiempo complementario como testimonio o prueba de la rectitud de su intención y de su firme deseo de contribuir al bienestar de la sociedad española».

Pero desde mayo han pasado ya ocho meses, y la única contestación oficial hasta ahora es un oficio de Presidencia del Gobierno (6 de junio), en el que se da por recibida la propuesta de Justicia y Paz y se comunica que ha pasado a ser estudiada — como iniciativa o sugerencia — por diversos organismos. Poco menos que nada, sobre todo para responder a una iniciati-

va que, avalada por 1.250 firmas de hombres y mujeres que se comprometían previamente a realizar ese Voluntariado para el Desarrollo, resolvería un problema de creciente gravedad dentro de la sociedad española. Y que prácticamente en todas las sociedades europeas ha sido ya planteado positivamente al reconocer la objeción de conciencia.

Los autores del Manifiesto han decidido no seguir esperando y pasar a la acción cívica: «Ir a la guerra, sí, pero a la guerra contra el analfabetismo, contra la falta de guarderías y de locales de ancianos. Hemos sido llamados al servicio de la Patria y hemos acudido a nuestro modo», dicen en su proclama, afirmando que «a menos que seamos encarcelados, continuaremos trabajando en este barrio durante dos años, llevando adelante los servicios en los que estamos y aceptando una inspección del Gobierno. La solución —insistimos—, dentro de unos días. ■ FERNANDO LARA.

## LOS CORRALES DE BUELNA

### El pueblo de la marcha

«Trabajo, sí. Palabras, no», decía una pancarta que llevaban los obreros que desde Los Corrales de Buena marchaban a pie hacia Santander, situado a cuarenta kilómetros de distancia del pueblo, a fin de sensibilizar a la opinión pública sobre la situación en que les ha dejado el cierre de la factoría Authi.

Estuve a mediados de semana en Los Corrales de Buena para conocer con algún detalle la situación de un problema que ha conducido a lo que puede calificarse de un verdadero hito, al menos por lo que respecta a España, en la historia del movimiento obrero.

El pueblo se encuentra en la carretera que desde Palencia se dirige, por el puerto del Pozal y Reinosa, hacia Torrelavega y Santander.

Desde Reinosa, la carretera baja por un precioso desfiladero, las llamadas hoces del río Besaya, y pasa por pueblos llenos de viejas casonas montañesas: Pesquera, Bárcena de Pie de Concha, Silió, que queda un poco apartado a la derecha de la carretera; Las Fraguas...

Los Corrales de Buena tiene también un núcleo antiguo con edificaciones de piedra y viejas casas santanderinas con galerías y cortavientos. Aún está en pie la torre del famoso Pero Niño, almirante de Castilla. Pero la verdadera solera del pueblo, su carácter dominante, es industrial. Todas las personas con las que he hablado estos días —el enardecimiento provocado por los hechos me ha facilitado entablar en seguida conversación con la gente

en bares y mesones— me recordaban que, ya en 1917, los trabajadores de Los Corrales mantuvieron una huelga que duró nueve meses en defensa de la jornada de ocho horas. Me contaban la historia con una mezcla de satisfacción de clase por la reciente hazaña de la marcha sobre Santander y orgullo local de pueblo pequeño, cuyo nombre ha sido noticia importante en España y fuera de ella. «En París, en Londres, en Pekín, en el Japón y en el mundo entero han hablado de la marcha», dijo uno mientras merendábamos los excelentes chorizos y morcillas que había preparado la tía Pirulina en la tabernita que regenta en el barrio de La Mata.

De la vieja fábrica de harinas que hubo en Los Corrales hace un siglo se pasó después a la fabricación de herrajes, tachuelas y otros productos de rudimentaria siderurgia, en lo que constituyó el núcleo de las Forjas de Buena, creadas por la familia Quijano. Su principal representante, José María Quijano, fue un empresario muy al estilo «Rerum Novarum» y hombre por cuya iniciativa y humano trato es recordado en el pueblo. Mandó construir, además de la iglesia, escuelas para los niños y un centro de Formación Profesional, que hoy regentan los hermanos de La Salle y que ha jugado un papel importante en la tradición industrial de Los Corrales.

La fusión, realizada ya después de la guerra, de Forjas de Buena con la empresa, también santanderina, Nueva Montaña, dio lugar a la Nueva Montaña Quijano en torno de la cual gira todo el desarrollo industrial de Los Corrales de Buena. Asociada con Philips, constituyó la fábrica de electrodos que hasta hoy sigue trabajando en el pueblo. Hacia 1957, los hornos de Los Corrales comenzaron a dedicar parte de su actividad a la fabricación de piezas de automóviles destinadas a la factoría de Fasa-Renault, en Valladolid. Posteriormente, la asociación de Nueva Montaña con British Leyland dio lugar a la creación de Authi. En 1969, tras una serie de arreglos financieros, Authi se separó de Nueva Montaña y se dividieron las instalaciones de la forma que hoy puede verse en el recinto de la fábrica, asignándose aproximadamente la mitad del personal a cada una de las empresas.

Cuento todo esto para hacer notar lo que representaría para Los Corrales de Buena, si no se encuentra una solución satisfactoria al problema planteado, el cierre de la factoría Authi. Los dos mil cien puestos de trabajo que la fábrica ofrecía cuando suspendió sus actividades representan más o menos la mitad de los existentes en el pueblo, repartiéndose el resto Nueva Montaña Quijano y la fábrica de electrodos, así como algunos pequeños talleres y los servicios, que dependen casi exclusivamente de la población industrial.

El pueblo de Los Corrales de Buena tiene alrededor de diez mil habitantes, y las factorías dan vida a muchos otros pueblos y aldeas del valle, de carácter eminentemente rural, como pude comprobar en la vecina Collado al cruzarme en las empinadas calles del pueblo con mulas y vacas. Entre un treinta y un cuarenta por ciento de los obreros de las fábricas alternaban su dedicación industrial con el minifundismo agrícola y ganadero. La pérdida de estos dos mil cien puestos de trabajo, por tanto, significaría o bien la emigración o bien la vuelta a unas condiciones exclusivamente basadas en la agricultura.

Sucede esto además en la provincia de Santander, donde no abunda la industria. Aparte de Los Corrales de Buena y de Torrelavega y Santander, son muy pocos los centros industriales de la Montaña. Algunos sostienen, y he oído el argumento repetido varias veces, que las «fuerzas vivas» santanderinas desean conservar la bucólica paz y los bellísimos paisajes de Cantabria, incontaminados de humos y ruidos. Otros se atreven a asegurar que la no industrialización de Santander se debería a un deliberado propósito de centralismo administrativo que desea dejar una «zona verde» sin conflicto entre los